

Señores:

PROCURADURÍA JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CALI (REPARTO)

E. S. D.

CONVOCADO: PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

CONVOCANTE: ALLIANZ SEGUROS S.A.

ASUNTO: SOLICITUD DE CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, con oficina en la Avenida 6 A Bis # 35N – 100 – Centro Empresarial de Chipichape – Oficina 212 de la ciudad de Cali, actuando en el presente proceso en mi calidad de apoderado general de **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, sociedad comercial anónima de carácter privado, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT 860.026.182-5, sometida al control y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera, conforme con la Escritura Pública No. 5.107 otorgada el 5 de mayo de 2004 en la Notaría Veintinueve (29) del Círculo de Bogotá D.C. que se aporta, mediante el presente escrito presento **SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PARA AGOTAR EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD** del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** contra la **PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CALI**, que tiene como pretensión la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos, que fueron expedidos dentro de la solicitud de conciliación con radicado No. E-2024-343474:

- Auto del 11 de junio de 2024, mediante el cual el Ministerio Público inadmitió la solicitud de conciliación presentada por Allianz Seguros por presuntamente no reunir los requisitos exigidos por el artículo 101 numeral 13 de la Ley 2220 de 2022.
- Auto del 24 de junio de 2024 por medio del cual se declaró desistida y se tuvo por no presentada la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por Allianz Seguros S.A en contra de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República.
- Auto del 5 de julio de 2024 por medio del cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del Auto de fecha 24 de junio de 2024, confirmándolo en su totalidad.

Igualmente se solicitará el restablecimiento del derecho que le asiste a mi poderdante por la expedición de los actos administrativos antes referidos.

I. OPORTUNIDAD

Previo la exposición de los enunciados fácticos y jurídicos que fundamentan la presente solicitud, es importante indicarle al despacho que este escrito se presenta dentro del término correspondiente, en atención al literal d) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece que el medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho debe presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo y, en el caso en concreto, el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del auto del 24 de junio de 2023, se notificó el día 5 de julio de 2024, por lo que el término de caducidad transcurriría desde el 8 de julio de 2024 hasta el 8 de noviembre de la misma anualidad, concluyendo que la presente petición conciliatoria se presenta en oportunidad.

II. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

- **PARTE CONVOCANTE:**

ALLIANZ SEGUROS S.A., sociedad legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT 860026182 – 5, representada legalmente por el señor Miguel Ángel Córdoba López, mayor de edad, identificado con cédula de extranjería No. 7.855.842 y/o quien haga sus veces.

- **APODERADO DE LA PARTE CONVOCANTE:**

El suscrito, **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.385.114 expedida en Cali, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 39.116 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, con dirección de notificación física en la Calle 69 No 4 – 48, oficina 502 de la Ciudad de Bogotá y dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

- **PARTE CONVOCADA:**

La constituye, la **PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CALI**, representada legalmente por la señora Lessdy Denisse López Espinosa en su calidad de Jefe de Dependencia o quien haga sus veces, con dirección de notificaciones en la Calle 11 #5-54 Edificio Bancolombia piso 3 de la ciudad de Cali y dirección electrónica: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co y ldlopez@procuraduria.gov.co

III. HECHOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LAS PRETENSIONES

PRIMERO: El 24 de mayo de 2024, ALLIANZ SEGUROS S.A. radicó solicitud de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA, para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por la expedición irregular de los siguientes actos administrativos: i) Fallo No. 010 de fecha 03 de octubre de 2023 con Responsabilidad Fiscal del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2018-01178, ii) Auto No. 742 de fecha 10 de noviembre de 2023 mediante el cual se resuelve recursos de reposición contra el Fallo No. 010 de fecha 03 de octubre con Responsabilidad Fiscal del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF- 2018-01178, iii) Auto No. 775 de fecha 4 de diciembre de 2023 mediante el cual se resuelve solicitud de aclaración del Fallo No. 010 de

fecha 03 de octubre de 2023 con Responsabilidad Fiscal del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2018- 01178, y, iv) Auto No. URF2- 0054 de fecha 15 de enero de 2024 por medio del cual se resuelve el grado de consulta del Fallo con responsabilidad fiscal No. 010 del 3 de octubre de 2023 y, en general, los actos administrativos proferidos dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2018-01178.

SEGUNDO: Mediante auto de fecha 11 de junio de 2024, enviado al correo notificaciones@gha.com.co el mismo día, el Ministerio Público inadmitió la petición conciliatoria, que le correspondió el radicado No. E-2024-343474, en razón al presunto incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 101 de la Ley 2220 de 2022, dado que no fue aportada la prueba de la constancia de recibido del traslado realizado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que consta de un radicado de 14 dígitos.

TERCERO: Cabe aclarar que el traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se efectuó el 24 de mayo de 2024. La evidencia de este hecho se adjuntó tanto en la solicitud de conciliación como en el escrito del recurso de reposición, tal y como se observa en el memorial que se dirigió al correo electrónico notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, así:

CONSTANCIA DE ENVÍO SOLICITUD DE CONCILIACIÓN POR ALLIANZ SEGUROS S.A.
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 12 DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY 2220 DE
2022// CONVOCADO: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA
DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA

Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Vie 24/05/2024 15:35

Para:cgr@contraloria.gov.co <cgr@contraloria.gov.co>;responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co

<responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co>;notificacionesjudiciales@contraloria.gov.co

<notificacionesjudiciales@contraloria.gov.co>

CC:notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co <notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co>

Cco:Alejandro De Paz Martinez <adepaz@gha.com.co>

1 archivos adjuntos (30 MB)

SOLICITUD DE CONCILIACIÓN POR ALLIANZ SEGUROS S.A. PRF- 2018-01178.pdf;

Señores,

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (REPARTO)

ASUNTO: SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

CONVOCANTE: ALLIANZ SEGUROS S.A.

CONVOCADO: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente señalar que el día 28 de junio de 2024 nuevamente se corrió traslado de la solicitud de conciliación a dicha entidad por medio de su página web, generando el soporte de radicación No. 20242522982602.

CUARTO: Por otro lado, respecto a la notificación del auto inadmisorio, se deja constancia de que la misma llegó al correo electrónico de notificaciones@gha.com.co con anotación de correo sospechoso, y se observa que, hasta el momento, **no hay confirmación de lectura del mismo**, como lo exige el artículo 56 del CPACA que establece:

“ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que el uso de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso tercero del artículo 53A del presente título.

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad.

Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará como un portal de acceso.

La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser certificado por la administración”.

De tal manera, hasta el día de hoy, el Ministerio Público no ha cumplido con la carga de acreditar que se accedió al mensaje remitido al correo electrónico notificaciones@gha.com.co, el día 11 de junio de 2024. En todo caso, este se conoció únicamente al momento de recibir la notificación del auto que tuvo por no contestada la solicitud de conciliación, esto es, el día 25 de junio de 2024, pues precisamente se le dio trámite a este último acto administrativo, tanto así que se presentó recurso de reposición y se remitió la solicitud de conciliación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por segunda vez.

QUINTO: Mediante Auto del 24 de junio de 2024, notificado al correo electrónico notificaciones@gha.com.co el día 25 de junio de 2024, la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos de Cali declaró desistida y no presentada la solicitud de conciliación de la referencia, en atención a que no se atendió lo ordenado respecto a la constancia de traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

SEXTO: El día 28 de junio de 2024, Allianz Seguros S.A. presentó oportunamente recurso de reposición contra el auto de fecha 24 de junio de 2024, a efectos que se revoque la decisión y en su lugar se admita la respectiva solicitud de conciliación extrajudicial.

SÉPTIMO: Mediante auto de fecha 5 de julio de 2024, la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos de Cali resolvió no reponer el auto del 24 de junio de 2024, por cuanto consideró que no se allegó la constancia de recibido del traslado que se realizó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, es decir, el radicado de 14 dígitos mencionado anteriormente. Lo cual a su parecer constituye el cumplimiento del requisito establecido en el numeral 13 del artículo 101 de la Ley 2220 de 2022.

Adicionalmente, en la motivación del acto administrativo en mención, la Procuraduría reconoció que el suscrito realizó el traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el día 24 de mayo de 2024, sin embargo, indicó que se incumplió con el requisito contemplado en el

numeral 13 del artículo 101 de la Ley 2220 de 2022 porque no se adjuntó la constancia de recibido de la ANDJE, imponiendo una carga excesiva al suscrito, en la medida que se escapa de su órbita y poder el que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado emita el recibido de la solicitud de conciliación, pues es evidente que emitir dicho recibido es una potestad o voluntad de dicha entidad y, si esta no lo hace, se estaría vulnerando el derecho a la administración de justicia de quien promueve la solicitud de conciliación, como en el presente asunto.

Frente a la notificación, como se indicó líneas atrás, la Procuraduría no acreditó que se accediera al mensaje. De hecho, adjuntó una imagen que refiere: “*el mensaje ase entregó a los siguientes destinatarios (...)*” y arguyó que era una carga del suscrito actuar con diligencia y atención frente a los correos sospechosos, como fue el correo que llegó del Ministerio Público el día 11 de junio de 2024. Nuevamente, la Procuraduría impone cargas excesivas al suscrito, dado que la carga de acreditar un efectivo acceso al mensaje es de la administración, más no del destinatario, máxime si se tienen en cuenta las implicaciones de su desconocimiento, como en el presente asunto. Sin más, la Procuraduría despachó desfavorablemente el recurso de reposición, negando y vulnerando el derecho a la administración de justicia de mi representada.

IV. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

- LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS SON NULOS POR DESCONOCER EL DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA DE MI REPRESENTADA

Con el propósito de ejercer un control de legalidad sobre los actos administrativos de carácter particular y concreto proferidos por las diferentes entidades del Estado, el legislador consagró en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el medio de control denominado “nulidad y restablecimiento del derecho”, mediante el cual es posible solicitar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la nulidad de dichos actos cuando una o varias personas se crean lesionadas en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica. Así mismo, podrá pedir que se le restablezca su derecho y/o se le repare el daño causado, según el caso.

Dicha nulidad contra los actos administrativos procederá, si se llega a demostrar uno o varios de los siguientes cargos establecidos por la norma (CPACA). Veamos:

“Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien las profirió”.

Así las cosas, sobre las causales reguladas en la norma de citas, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, dentro de la radicación No. 11001-03-27-000-2020-00017-00(25346)¹, sostuvo:

¹ Consejo de Estado, Sentencia del 29 de julio de 2021, M.P. Myriam Stella Gutiérrez, Exp. (25346)

“El demandante expone que se configuran las causales de nulidad por infracción de la norma en que debía fundarse y por falsa motivación. Respecto de la primera, debe tenerse en cuenta que esta Sección señaló que la infracción de las normas en que debía fundarse consiste en la violación de normas superiores i) por su falta de aplicación, ii) por aplicación indebida o iii) por interpretación errónea. La Sala Especial Transitoria de Decisión (providencia del 2 de mayo de 2011, exp. 2003- 00572, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas) ha dicho que se infringe de manera directa la ley, por falta de aplicación, cuando se ignora la existencia de la norma, o porque a pesar de conocerla, no se aplica a la solución del caso. En cuanto a la aplicación indebida, señaló que se presenta cuando el precepto que se hace valer se usa o aplica a pesar de no ser el pertinente para resolver el asunto. Y, sostuvo que se presenta una interpretación errónea, cuando se le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde. La anterior causal está íntimamente relacionada con la falsa motivación de los fundamentos de derecho del acto acusado. Es por esto que el Consejo de Estado señaló que la causal de nulidad de falsa motivación por error de derecho se configura cuando la administración desconoce los supuestos jurídicos que deben fundamentar la decisión administrativa por alguno de los siguientes motivos: i) por inexistencia de la norma invocada por la autoridad, ii) por ausencia de relación entre la norma invocada por la entidad y los hechos objeto de su decisión y iii) por errónea interpretación”.

Conforme a lo expuesto, tenemos que entre las causales de nulidad se encuentra el desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa, lo cual se encuentra estrechamente ligado al defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, que conforme lo ha estudiado la Corte Constitucional, y lo ha recordado el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en su Sección Cuarta, dentro del radicado No. 20001-23-33-000-2012-00039-01 (20618)², cuando señaló:

*“Según ha afirmado el máximo intérprete de la Constitución, uno de los defectos procedimentales en los que pueden incurrir los funcionarios judiciales, **es el exceso ritual manifiesto**, el cual se da cuando se conciben los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial; como cuando la apreciación de las pruebas se basa en rigorismos procesales (Sentencias T-386 de 2010 y T-363 de 2013)”.*

En el caso que nos ocupa, se pretende la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos de Cali inadmitió y tuvo por no presentada la solicitud de conciliación prejudicial presentada por Allianz Seguros S.A.

La decisión del Ministerio Público se fundamentó en el presunto incumplimiento del numeral 13 del artículo 101 de la Ley 2220 de 2022, que exige una constancia de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recibió copia íntegra de la petición de conciliación cuando una de las partes es una entidad pública del orden nacional. Sin embargo, es importante destacar que el traslado de la solicitud se realizó efectivamente el 24 de mayo de 2024 vía correo electrónico, junto con la notificación a las demás partes interesadas. Este hecho es conocido y aceptado por la Procuraduría en el Auto del 5 de julio de 2024, tal y como se señaló en el acápite de hechos.

Así las cosas, la inadmisión basada únicamente en la ausencia de un radicado de 14 dígitos emitido por la ANDJE, constituye un claro ejemplo de exceso ritual manifiesto. El traslado

² Consejo de Estado, Sentencia del 8 de febrero de 2018, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, Exp. (20618)

realizado el 24 de mayo de 2024 cumplía sustancialmente con el requisito establecido en la ley, al poner en conocimiento de la Agencia la solicitud de conciliación, permitiéndole así actuar en defensa de los intereses litigiosos del Estado si lo consideraba necesario. La exigencia de un radicado específico, cuando el objetivo principal de la norma ya se había cumplido, **representa una interpretación excesivamente formalista que obstaculiza el acceso a la justicia y la eficacia del derecho sustancial.**

Además, es importante señalar que, a pesar de considerar cumplido el requisito legal, y en aras de dar continuidad al proceso, se procedió a realizar un nuevo traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado siguiendo estrictamente el mecanismo indicado en el auto inadmisorio, como se evidencia en los anexos presentados con el recurso de reposición, sin embargo, la Procuraduría insistió en que se incumplió con el requisito contemplado en el numeral 13 de la Ley 2220 de 2022 y tuvo por no presentada la solicitud de conciliación, desconociendo evidentemente los derechos al debido proceso y derecho de defensa de mi representada.

La jurisprudencia constitucional y administrativa ha sido clara al establecer que los funcionarios judiciales deben evitar interpretaciones rígidas que sacrifiquen los derechos fundamentales en aras de tecnicismos procesales. El derecho procesal debe ser un medio para alcanzar la justicia, no un fin en sí mismo. Cabe destacar que, dentro de los principios de la conciliación, se encuentra la garantía del acceso a la justicia que fue definido en el numeral 2 del artículo 4 de la Ley 2220 de 2022, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 4. Principios. La conciliación se guiará, entre otros, por los siguientes principios:

(...)

*2. Garantía de acceso a la justicia. En la regulación, implementación y operación de la conciliación se garantizará que todas las personas, sin distinción, tengan las mismas oportunidades, **y la posibilidad real y efectiva de acceder al servicio que solicitan.** Esta garantía implica que la prestación del servicio tanto por los particulares, como por las autoridades, investidas de la facultad de actuar como conciliadores generen condiciones para acceder al servicio a poblaciones urbanas y rurales, aisladas o de difícil acceso geográfico, y acogiendo la caracterización requerida por el servicio a la población étnica, población en condición de vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad.*

Se deberá garantizar que el trato brindado no resulte discriminatorio por razones de género, raza, idioma, opinión política, condición social, origen étnico, religión, preferencia ideológica, orientación sexual, ubicación territorial, prestando especial atención a la garantía de acceso a la justicia en la ruralidad, en especial en los municipios a que se refiere el Decreto Ley 893 de 2017.

En consecuencia, habrá diferentes modelos para la implementación del instrumento, que atenderán a los diversos contextos sociales, geográficos, económicos, etnográficos y culturales donde se aplique. Para tal efecto se podrán constituir centros de conciliación especializados en la atención de grupos vulnerables específicos”.

Igualmente, las actuaciones administrativas se desarrollan con observancia de distintos

principios, entre ellos, el de eficacia, previsto en el numeral 11 del artículo 3 del CPACA, así:

*“11. En virtud del principio de eficacia, **las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán**, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”. (énfasis propio)*

Conforme a estos dos principios, es claro que la administración pública tiene el deber de garantizar el acceso a la administración de justicia y hacer efectivos los derechos sustanciales de los administrados, mediante una función pública eficaz y eficiente. Así lo ha considerado la Corte Constitucional, aduciendo:

*“En este orden de ideas, es evidente para esta Corporación que el principio de eficacia impide que las autoridades administrativas permanezcan inertes ante situaciones que involucren a los ciudadanos de manera negativa para sus derechos e intereses. Igualmente, que la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades debe ser un fin para las mismas, es decir, **que existe la obligación de actuar por parte de la administración y hacer una real y efectiva ejecución de las medidas que se deban tomar en el caso que sea necesario, en armonía y de conformidad con el debido proceso administrativo**. En síntesis, esta Corte ha concluido que el logro de la efectividad de los derechos fundamentales por parte de la administración pública se basa en dos principios esenciales: el de eficacia y el de eficiencia”³.*

Por otra parte, este Tribunal también ha sentado las bases del principio y derecho de acceder a la administración de justicia, con fundamento en el artículo 228 y 229 superiores, teniendo como presupuesto la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal o procesal. En este sentido, ha sostenido:

“ La Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Ahora bien, con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y en el principio de la prevalencia del derecho sustancial, esta Corporación ha sostenido que en una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales”⁴.

Dicho esto, es claro que la eficacia es uno de los pilares fundamentales de la función pública y, de esta, se desprende la necesidad de que prevalezca el derecho sustancial sobre el formal al momento de garantizar el acceso a la administración de justicia. Ello significa que, al momento de impartir una decisión, la administración pública está en el deber de buscar la verdad material o real sobre la procesal o meramente formal.

³ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-826 del 13 de noviembre de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

⁴ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-268 del 19 de abril de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio

En conclusión, es evidente que la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos de Cali aplicó una interpretación excesivamente rigurosa de los requisitos formales en este caso. Tal enfoque, aunque aparentemente se adhiere a la letra de la ley, en realidad contradice su espíritu y finalidad, socavando principios fundamentales como el acceso a la justicia y la primacía del derecho sustancial. Lo que conlleva a la inadmisión y posterior rechazo de la solicitud de conciliación presentada por Allianz Seguros S.A. convirtiendo requisitos meramente formales en obstáculos para el acceso a la justicia.

V. PRETENSIONES

De conformidad con los hechos y elementos jurídicos antes descritos, se solicita al despacho citar y hacer comparecer al convocado, con la finalidad de llegar a una solución de mutuo acuerdo respecto de las siguientes pretensiones:

PRIMERA: QUE SE DECLARE LA NULIDAD de los actos administrativos expedidos dentro de la solicitud de conciliación con radicación E-2024-343474, contenidos en el Auto del 11 de junio de 2024, mediante el cual el Ministerio Público inadmitió la solicitud de conciliación presentada por Allianz Seguros por presuntamente no reunir los requisitos exigidos por el artículo 101 numeral 13 de la Ley 2220 de 2022, el Auto del 24 de junio de 2024 por medio del cual se declaró desistida y se tuvo por no presentada la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por Allianz Seguros S.A. en contra de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República y Auto del 5 de julio de 2024 por medio del cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del Auto de fecha 24 de junio de 2024, confirmándolo en su totalidad.

SEGUNDA: Como consecuencia de la solicitud precedente, **SE ORDENE** a título de restablecimiento del derecho, que se tenga por agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial presentada por Allianz Seguros S.A. en contra de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República.

VI. FORMULA DE CONCILIACIÓN PROPUESTA POR ALLIANZ SEGUROS S.A.

En atención a lo consagrado en el numeral 5 del artículo 101 de la Ley 2220 de 2022, procedo a proponer la siguiente fórmula de arreglo:

PRIMERO: Que la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos de Cali, en virtud de la facultad consagrada en los artículos 93 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se sirva revocar los siguientes actos administrativos que fueron expedidos dentro de la solicitud de conciliación con radicado No. E-2024-343474:

- a. Auto del 11 de junio de 2024, mediante el cual el Ministerio Público inadmitió la solicitud de conciliación presentada por Allianz Seguros por presuntamente no reunir los requisitos exigidos por el artículo 101 numeral 13 de la Ley 2220 de 2022.

- b. Auto del 24 de junio de 2024 por medio del cual se declaró desistida y se tuvo por no presentada la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por Allianz Seguros S.A. en contra de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca de la Contraloría General de la Republica
- c. Auto del 5 de julio de 2024 por medio del cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del Auto de fecha 24 de junio de 2024, confirmándolo en su totalidad.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, que la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos de Cali expida un acto administrativo mediante el cual se tenga por agotado el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial para instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por Allianz Seguros S.A. en contra de la Contraloría General de la Republica

VII. MEDIO DE CONTROL A INTERPONER DE RESULTAR FRACASADA LA PRESENTE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN

De resultar fracasada la presente solicitud de conciliación, se acudirá a la Jurisdicción Contencioso Administrativa a demandar los hechos y cargos antes referidos, a través del MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO consagrado en el Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

VIII. PRUEBAS

- Escrito de solicitud de conciliación extrajudicial presentada por Allianz Seguros S.A.
- Constancia de radicación de solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos de Cali.
- Correo electrónico del 24 de mayo de 2024 en el cual se corre traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como a la Contraloría General de la República.
- Correo electrónico del 28 de junio de 2024, en el cual se corre traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de la solicitud de conciliación extrajudicial.
- Constancia del formulario con radicado No. 20242522982602
- Recurso de reposición y constancia del envío del escrito a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como a la Contraloría General de la República.
- Auto del 11 de junio de 2024, Auto del 5 de julio de 2024 y Auto de fecha 24 de junio de 2024 expedidos por la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos de Cali, dentro del radicado E-2024-343474.

IX. JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que ni mi poderdante ni el suscrito hemos presentado, hasta la fecha, parecida solicitud ante otra autoridad, con identidad de violación, hechos y derechos reclamados a la de la referencia.

X. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA CONCILIACIÓN

Artículos 2.2.4.3.1.1.1 y siguientes del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 y demás normas concordantes y complementarias.

XI. NOTIFICACIONES

• **PARTE CONVOCANTE**

De manera respetuosa solicito que las actuaciones que deban notificarse personalmente a mi representada, se efectúen a través del suscrito en la Av. 6A Bis No. 35N - 100 Oficina 212 del Centro Empresarial Chipichape de la ciudad de Cali, Valle Del Cauca; adicionalmente, tener en cuenta la siguiente dirección de correo electrónica: notificaciones@gha.com.co

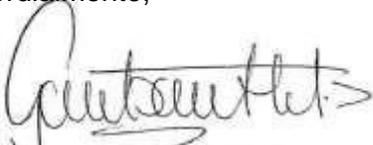
• **PARTE CONVOCADA**

La PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CALI, representada legalmente por la señora Lessdy Denisse López Espinosa en su calidad de Jefe de Dependencia o quien haga sus veces, en la Calle 11 #5-54 Edificio Bancolombia piso 3 de la ciudad de Cali y dirección electrónica: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co y ldlopez@procuraduria.gov.co

XII. ANEXOS

- Documentos relacionados en el acápite de pruebas
- Cedula de ciudadanía de Gustavo Alberto Herrera Ávila
- Tarjeta profesional de abogado Gustavo Alberto Herrera Ávila
- Certificado de existencia y representación legal de Allianz Seguros S.A.
- Poder general para actuar

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.